

CELIV

Centro de Estudios Latinoamericanos
sobre Inseguridad y Violencia

Explorando las causas de los homicidios: Una compleja interacción de factores

Croci, G. & Gomez, J.



Documento de Trabajo Nro. 007 diciembre, 2023 ISSN 2591-6246

UNTREF

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRES DE FEBRERO

Contenidos

Resumen.....	2
Introducción.....	4
1. Revisión de la literatura.....	7
2. Datos y metodología.....	13
3. Resultados.....	16
4. Discusión.....	20
5. Limitaciones y futuras líneas de investigación.....	33
6. Conclusiones.....	34
Referencias.....	36

Resumen



Las investigaciones sobre las causas de los homicidios no han sido concluyentes, se han limitado a regiones o países concretos y se han centrado en un reducido abanico de variables. Con el fin de ampliar la literatura actual, nuestro objetivo es identificar las variables que puedan tener un impacto significativo en las tasas de homicidio a nivel regional y global. El estudio se centra en la eficacia del gobierno y la corrupción, junto con variables comúnmente utilizadas como el desempleo, el nivel educativo, la pobreza y la población urbana. Los resultados muestran que el nivel educativo de un país es un factor significativo que se relaciona con las tasas globales de homicidio, junto con la eficacia del gobierno -un hallazgo particularmente relevante en América-. Por el contrario, la corrupción, la pobreza y el desempleo tienen escaso impacto a nivel global y en la mayoría de las regiones. Esto implica que mejorar la educación y la eficacia institucional puede tener un impacto significativo en la reducción de las tasas de homicidio. El artículo propone posibles mecanismos para entender estos resultados relacionados con la fragmentación social, el crimen organizado y los mercados ilegales.

Cantidad de palabras: 10,095

Palabras claves: Homicidios, América Latina, Corrupción, Eficacia de gobierno, Educación.

Introducción

Hasta la fecha, los estudios sobre las posibles causas de los homicidios no han sido concluyentes, es más, algunos estudios parecen contradecirse entre sí. Por otra parte, las bases de datos han incluido sólo una selección de países de todo el mundo (por ejemplo, en su mayoría, países del norte global, donde existe una amplia disponibilidad de datos) o se han centrado únicamente en regiones específicas. La hipótesis de que una o un conjunto de variables pueden explicar las tasas de homicidio no parece cumplirse en todas las regiones. Como tal, esta investigación completa importantes vacíos en la literatura al investigar qué variables están más asociadas con las tasas de homicidio desde una perspectiva global y si existen diferencias significativas entre regiones.

El Estado moderno, según Weber, se caracteriza por el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Para McClelland (1996, p.447), el uso de la violencia debe estar vinculado al gobierno: "En la sociedad liberal ideal, la única forma legítima de violencia sería la violencia utilizada por el Estado, bajo formas de ley, para la detención y el castigo de los malhechores". Los Estados, según Tilly (2017), son centralizados, distinguidos por organizaciones cuyos funcionarios reclaman con mayor o menor éxito la autoridad sobre los principales medios de violencia dentro de una población que vive en un territorio. Por lo tanto, podemos concluir que la función principal de un gobierno es proporcionar seguridad mediante la defensa contra las invasiones transfronterizas y otras formas de amenazas externas, pero también mediante la prevención de la delincuencia y la violencia social (Rotberg, 2003). En consecuencia, la coerción se convierte en un elemento central de las definiciones del Estado y de la capacidad gubernamental (Mann, 1984; Schilling, 1999; Schuppert, 2011; Malešević, 2017).

La idea clave, por lo tanto, es que el uso de la violencia sólo debe ser implementado por, y estar sujeto al control de las instituciones públicas (Whitehead et al., 2010). Dentro de la gama de actividades delictivas incluidas en la categoría de delitos violentos, las tasas de homicidio indican el fracaso de un gobierno a la hora de proporcionar seguridad y son la medida más precisa del nivel de violencia de un país (Pearce, 2010), ya que generalmente se acepta como métrica de la seguridad (Lappi-Seppälä y Lehti, 2014). El delito más grave, el homicidio, tiene repercusiones que van mucho más allá de la muerte inmediata de la víctima y del trauma que aflige a la comunidad y a las personas cercanas a las víctimas (lo que comúnmente se conoce como "víctimas secundarias"). Los homicidios son un problema mucho mayor para la sociedad, conllevan costos económicos significativos para las instituciones públicas (Jaitman, 2017), disminuyen la actividad económica en general (Quiroz et al., 2015), afectan las capacidades electorales (Ponce, 2016) y se asocian con la desintegración social y el deterioro institucional (McGuinn, 2015). En suma, los homicidios representan la falla más visible de la capacidad del gobierno de cumplir con sus deberes.

Los datos sobre homicidios son considerados como el tipo más completo y consistente de datos sobre delincuencia, y han sido ampliamente utilizados en estudios sobre violencia y seguridad durante muchas décadas (Oberwittler, 2019). Las variaciones mundiales de las tasas de homicidio son sustanciales. Por ejemplo, en 2021, Jamaica tuvo una tasa de homicidios de 52,13, mientras que para Bahrein la tasa fue de 0,07. Esta variación también existe dentro de las regiones y dentro de los países. Por ejemplo, en América Latina, en 2021, Honduras tenía una tasa de homicidios de 38,25 mientras que la de Bolivia era de 3,49 (UNODC, 2023). Por otro lado, en 2020 dentro de Argentina, Rosario tenía una tasa de 16,4 contrastando con la tasa de Vicente López de 1,1 (Bergman et al., 2023). Las teorías macro que han intentado explicar las variaciones en las tasas de homicidio a través del tiempo como el proceso civilizatorio de Elias (1939), la teoría de la anomia de Merton (1938) o la teoría de la desorganización social de Shaw y McKay (1942) son demasiado generales y no han podido explicar las diferencias actuales en los homicidios entre naciones. Las grandes variaciones en los niveles de las tasas de homicidio que existen por región hacen necesario investigar más en detalle el contexto de los homicidios y

las razones subyacentes de las fluctuaciones en las tasas de homicidio. Es necesario seguir investigando para comprender estas variaciones y crear hipótesis plausibles de por qué existen, así como para informar satisfactoriamente a los responsables de la formulación de políticas.

Uno de los objetivos más importantes de la investigación transnacional sobre homicidios es tratar de comprender estas diferencias aparentes entre países y regiones del mundo (Lappi-Seppälä y Lehti, 2014). Al considerar las diferencias en los niveles de homicidios entre regiones, la bibliografía varía significativamente. Por ejemplo, se suelen tener en cuenta variables clásicas, como factores económicos (desigualdad, pobreza, desempleo), factores sociales (niveles de educación) y, más recientemente, factores institucionales (eficacia, corrupción). Este artículo aporta nuevos conocimientos desde distintas perspectivas. En primer lugar, los análisis cuantitativos han puesto ampliamente a prueba la teoría de la modernización (Stamatel, 2014). Sin embargo, se ha investigado mucho menos el poder explicativo de las variables institucionales, como la eficacia del gobierno y los niveles de corrupción, sobre los homicidios en todo el mundo. Este estudio es el primer intento de comprender su importancia en diferentes regiones. En segundo lugar, en general, la mayoría de los países incluidos en estos estudios eran democracias occidentales o naciones de altos ingresos. Como tales, las variables que se han relacionado con las tasas de homicidio sólo explican las muy limitadas diferencias en dichas tasas entre los países industrializados. El presente trabajo se amplía al incluir países de todas las regiones del mundo con datos que abarcan un periodo significativo (2012 - 2021).

El artículo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección se ofrece una revisión concisa de los resultados de la investigación sobre la relación entre diferentes variables y los homicidios, y se ilustra la existencia de variaciones significativas entre regiones. A continuación, se presenta el análisis de regresión de panel que realizamos para examinar las posibles causas de los homicidios. Tras presentar los resultados del análisis, discutimos los hallazgos, las limitaciones y aportamos conclusiones.



1. Revisión de la literatura

Esta sección ofrece una breve revisión bibliográfica de las posibles causas de los homicidios. En primer lugar, se describen las causas plausibles que se han estudiado previamente en todas las regiones. Seguidamente, se revisan estudios específicos por región y/o país.

1.1. Estudios globales

La bibliografía relativa a las causas probables de los homicidios es amplia pero no es concluyente. Varios estudios transnacionales han examinado diversas variables que pueden influir en las tasas de homicidio, incluidos factores estructurales clásicos como la desigualdad de ingresos, la pobreza, la educación, los niveles de democracia, los indicadores de población, las prácticas sancionadoras y el desarrollo humano. Sin embargo, los efectos identificados para estas variables varían según los estudios. Por ejemplo, Fajnzylber et al. (2002a); Fajnzylber et al. (2002b); Pratt y Godsey (2003); Nivette (2011) y Lappi-Seppälä y Lehti (2014) encontraron un fuerte efecto en las tasas de homicidio relacionado con la desigualdad de ingresos, mientras que Neumayer (2003) sugiere que esta relación puede ser espuria. Por otra parte, Soares (2004) descubrió que, además de la desigualdad de ingresos, el crecimiento económico y la educación también reducen las tasas de homicidio. Sin embargo, se ha encontrado que, para países con niveles medios de desarrollo humano, sólo la desigualdad puede predecir los niveles de homicidios, mientras que el desarrollo económico y la pobreza no lo hacen (Ouimet, 2012). De hecho, la pobreza ha sido considerada como una posible variable explicativa de las tasas de homicidio desde el siglo XX, pero se han obtenido resultados inconsistentes en los distintos estudios (Messner, 1982; Bailey, 1984; Hsieh y Pugh, 1993; Santos et al., 2018).

Otros estudios han explorado nuevas variables alternativas para predecir las tasas de homicidio. Las variables utilizadas incluyen la heterogeneidad étnica, la inestabilidad política, la

importación de las armas, el número de agentes de policía, la duración de las condenas, entre otras (Lappi-Seppälä y Lehti, 2014; Asongu y Acha-Anyi, 2019; Cao y Zhang, 2017). Sin embargo, un grupo de variables asociadas con la gobernanza, las instituciones gubernamentales y su legitimidad y eficacia arrojan sistemáticamente resultados mayormente coherentes, mostrando una fuerte correlación con los homicidios y la violencia en diferentes estudios. Por ejemplo, Eisner y Nivette (2013) realizaron una revisión exhaustiva y una síntesis de la literatura empírica sobre la relación entre legitimidad y delincuencia, revelando una débil asociación en la dirección esperada. No obstante, identificaron limitaciones en la investigación disponible que deberían abordarse en futuros estudios. Lafree y Tseloni (2006) llevaron a cabo una investigación de cuarenta y cuatro países entre 1950 y 2000. Descubrieron que las tasas de delitos violentos alcanzaron su punto máximo en las democracias en transición, mientras que las tasas de homicidios aumentaron progresivamente en las democracias plenas durante la segunda mitad del siglo XX. Adicionalmente, Nivette (2011) observó un impacto débil de los índices de democracia en las tasas de homicidio, mientras que Neumayer (2003) y Lappi-Seppälä y Lehti (2014) encontraron lo contrario.

En particular, la eficacia del gobierno ha cobrado relevancia en los últimos años en el corpus de literatura sobre la explicación de los homicidios. Azfar (2005) identificó una fuerte correlación entre el nivel de homicidios y la eficacia del gobierno en varios países. Estudios anteriores han demostrado sistemáticamente que la calidad de la gobernanza es una variable fuertemente correlacionada para explicar las tasas de homicidio en un escenario transnacional (Lappi-Seppälä y Lehti, 2014; Cao y Zhang, 2017; Tebaldi y Alda, 2017; Croci y Chainey, 2022). Además, la legitimidad del gobierno también se ha identificado como una variable fundamental para explicar las tasas de homicidio. Lederman et al. (2002) sostienen que la confianza en los miembros de la comunidad tiene el efecto de disminuir la ocurrencia de crímenes violentos. Dawson (2017) sostiene que existe una asociación consistentemente fuerte y negativa entre la creencia generalizada en la legitimidad del Estado y las tasas de homicidio, concluyendo que las valoraciones subjetivas de la legitimidad del Estado moldean significativamente las tasas de homicidio transnacionales. En línea con los hallazgos de Dawson, Oberwittler (2019) concluye

que las mejoras en la legitimidad de las instituciones estatales podrían conducir a tasas de homicidio más bajas. Por último, para generalizar la idea, según Nivette (2014), cuando falta legitimidad, los ciudadanos pueden recurrir a la autosuficiencia o desvincularse de las instituciones, socavando así el control social.

1.2. Europa

El continente europeo, junto con gran parte de Asia, registra las tasas de homicidio más bajas del mundo. Desde principios del siglo XVII, los homicidios en Europa han ido disminuyendo de forma constante a la par que avanzaba el proceso de modernización (Eisner, 2001). No obstante, la región sigue lidiando con casos de homicidios sin resolver. Con el fin de comprender este fenómeno, varios investigadores han llevado a cabo diferentes estudios transnacionales. Algunos de ellos se han concentrado en varios predictores estructurales, incluyendo el PIB per cápita, la densidad de población, la diversidad étnica, la desigualdad de ingresos, el desempleo, la edad, el desarrollo del país, entre otros (McCall et al., 2012; Stamatel, 2009). Por ejemplo, Machin et al. (2011) descubrieron que la mejora de la educación en Gran Bretaña tiene importantes beneficios sociales y puede reducir la delincuencia.

Por otro lado, Nivette (2012) ha profundizado en el estudio de la relación entre el nivel de legitimidad política de los estados y los homicidios en países europeos, revelando que los países con una fuerte legitimidad política presentan niveles de homicidios significativamente más bajos. Asimismo, alineado con la teoría de Nivette, Stamatel (2016) concluyó que los valores democráticos ejercen un impacto tanto directo como indirecto en las tasas de homicidio, siendo este último efecto mediado a través de la eficacia de las instituciones y prácticas democráticas.

1.3. Norteamérica

Aunque la región de América del Norte cuenta con una parte importante de la bibliografía sobre homicidios, ésta suele centrarse en aspectos demográficos y geográficos específicos (por ejemplo, véase, Glaeser y Sacerdote, 1999; Morenoff et al., 2001; Lee et al., 2001), careciendo

de una explicación a escala nacional o regional de los homicidios en el total de la población. Aun así, hay algunos estudios que intentan explicar el fenómeno de forma más general. Por ejemplo, Hazra y Aranzazu (2022) realizaron un análisis comparativo, evaluando la influencia del gasto público en bienestar y educación en contraste con los efectos de las inversiones en la aplicación de la ley y la corrección sobre la delincuencia para 50 ciudades de Estados Unidos. Los resultados obtenidos en el período de 1994 a 2014 sugieren que los gastos en bienestar público y educación tienen el potencial de reducir las tasas de delitos violentos, mientras que la asignación de fondos a la aplicación de la ley parece disuadir principalmente los delitos contra la propiedad. Además, Fella y Gallipoli (2014), utilizando datos de Estados Unidos, descubrieron que el aumento de las tasas de graduación en la escuela secundaria reduce eficazmente la delincuencia.

Por otra parte, Rossow (2004) analizó la influencia del consumo de alcohol en las tasas de homicidio a lo largo de las provincias canadienses entre 1950 y 1999. Los resultados corroboran la teoría de que la venta de alcohol puede influir en los homicidios, sobre todo en regiones específicas y en lo que respecta a las tasas de homicidios masculinos. En otro ejemplo, Daly et al. (2001), analizaron la desigualdad de ingresos como variable explicativa de las diferencias en las tasas de homicidio entre Canadá y EE.UU. Su estudio encontró una correlación significativa entre la desigualdad y las variaciones en las tasas de homicidio entre ambos países. No obstante, Pridemore (2011) argumentó que, al analizar la relación con los homicidios, la pobreza tiene prioridad sobre la desigualdad. Además, Chintrakarn y Herzer (2012) reforzaron esas conclusiones y sugirieron que el aumento de la desigualdad de ingresos podría, paradójicamente, reducir la delincuencia al impulsar la demanda de protección contra la delincuencia en Estados Unidos.

Por otra parte, varios autores han analizado el desempleo como posible variable explicativa de los niveles de homicidio en EE.UU., pero los resultados varían según los estudios. South y Cohen (1985) identificaron un efecto negativo pero paradójico sobre los homicidios dependiendo de si se considera el nivel de desempleo o los cambios anuales en el desempleo. Sin embargo, Lester

(1992) y Raphael y Winter-Ebmer (2001) no encontraron ninguna asociación entre el desempleo y los delitos violentos.

1.4. *América Latina*

Dado que América Latina tiene las tasas de homicidio más altas del mundo (UNODC, 2023), varios investigadores han intentado comprender los niveles de homicidio a partir de diferentes variables sin llegar a conclusiones consistentes. Por ejemplo, Neapolitan (1994) argumentó que existía un fuerte componente cultural e histórico en las altas tasas de homicidio de los países latinoamericanos. Gleditsch et al. (2021) identificaron que la asistencia a la escuela secundaria y terciaria reducía las tasas de homicidio en México antes de la Guerra contra las Drogas. Rivera (2016) afirmó que los esfuerzos orientados a mejorar la capacidad judicial del gobierno e impulsar la asistencia escolar pueden contribuir a la promoción de la paz. Por otra parte, Briceño-León et al. (2008) sugirieron que los aspectos que contribuyen a la violencia incluyen las disparidades en la sociedad, la falta de oportunidades de empleo, la segregación urbana, una cultura de masculinidad, los mercados locales de drogas, la presencia de armas y los niveles prevalentes de consumo de alcohol. Además, Goh y Law (2023) sugieren que la desigualdad de ingresos está asimétricamente integrada con los niveles de delincuencia en la región.

No obstante, algunos estudios se han centrado en otras perspectivas para analizar el fenómeno de los homicidios en América Latina. Por ejemplo, Alda (2017) propuso que una asignación más sustancial y eficiente de los recursos gubernamentales es crucial para reducir las tasas de homicidio. Croci y Chainey (2022), por su parte, encontraron que la influencia de los factores estructurales para explicar la variación internacional en los niveles de homicidio es relativamente limitada, emergiendo la efectividad del gobierno y la corrupción como factores significativos asociados a las altas tasas de homicidio observadas en América Latina.

1.5. África

A diferencia de las demás regiones, África presenta dificultades en cuanto a la disponibilidad de datos, sobre todo en lo que respecta a las tasas de homicidio. No obstante, existe un corpus limitado de literatura que examina diferentes subregiones dentro del continente. Por ejemplo, Outwater et al. (2008) elaboraron un artículo descriptivo con literatura revisada por pares para África Subsahariana que muestra que los hombres se enfrentan, de cuatro a diez veces, a un mayor riesgo de muerte relacionada con el homicidio que las mujeres, y que la mayor vulnerabilidad se produce entre los adultos de 20 a 29 años. A su vez, Austin y Kim (1999) informaron de una correlación positiva entre el desarrollo educativo y los homicidios en África Subsahariana. En otro trabajo, Outwater et al. (2007) realizaron una investigación descriptiva sobre las tasas de homicidio en Tanzania, mostrando que más del 90% de las víctimas de homicidios eran hombres jóvenes (en su mayoría desempleados), que ocurrían en entornos urbanos, y que una proporción significativa de los homicidios fueron perpetrados por miembros de la comunidad que actuaban en funciones policiales contra ladrones.

Sudáfrica es el país de la región que presenta mejores estadísticas en este sentido. En consecuencia, la bibliografía sobre este país es mucho más extensa. Por ejemplo, Seedat et al. (2009) realizaron una investigación descriptiva sobre homicidios y lesiones y observaron que la violencia está relacionada con factores como la desigualdad de ingresos, el desempleo, el abuso generalizado del alcohol, la pobreza y las nociones patriarcales de masculinidad. Sin embargo, identifican una ausencia significativa de gestión y liderazgo gubernamental, que parece ser un factor crucial para abordar los altos niveles de violencia. Por otra parte, Altbeker (2008) investigó variables como el origen étnico, la ubicación y los bajos ingresos medios de los hogares en relación con las tasas de homicidio en Sudáfrica, y descubrió que, aunque en general se supone que estos factores influyen en la delincuencia violenta, los datos, aunque sugerentes, no son concluyentes. Por su parte, también en Sudáfrica, Jonck et al. (2015) constataron que completar el 12º grado reduce la probabilidad de encarcelamiento.

1.6. Asia y Oceanía

En el caso de Asia y Oceanía, investigaciones anteriores han propuesto diversas variables para explicar las tasas de homicidio y la delincuencia en general, mientras que otras han realizado análisis descriptivos de los datos para comprender las condiciones de la región. Arif et al. (2017) llevaron a cabo un examen de cómo los factores macroeconómicos y socioeconómicos, incluidas las desigualdades sociales, el desarrollo económico, la urbanización, la pobreza, y el desempleo, entre otros, influyen en las tasas de homicidio en los países asiáticos, concretamente en los afectados por el terrorismo. El estudio concluyó que existe una relación significativa entre estos factores y las tasas de homicidio. A su vez, Furqan y Mahmood (2020) hallaron una asociación negativa entre el desarrollo educativo y los homicidios en la región. Saleemi y Amir-ud-Din (2019) examinaron la influencia de la calidad de la gobernanza en las tasas de delincuencia en un grupo de países asiáticos en el periodo comprendido entre 1984 y 2014. Sus hallazgos revelaron asociaciones significativas entre varias categorías de delitos, incluidos los homicidios, los robos, los secuestros y los allanamientos de viviendas, y factores como las condiciones socioeconómicas, la corrupción, la ley y el orden, los conflictos externos, entre otros. En particular, entre las variables económicas examinadas, sólo el PIB per cápita y la desigualdad de ingresos mostraron una correlación negativa significativa con los homicidios.

Asimismo, se han realizado estudios sobre países concretos. Por ejemplo, Wille (2006) analizó la relación entre el programa *Small Arms and Light Weapons* de Camboya, el uso de armas y las tasas de homicidio. Por otro lado, Broadhurst (2002) y Broadhurst y Bouhours (2009) llevaron a cabo un análisis descriptivo del escenario delictivo de Camboya y su relación con las tendencias de los homicidios. Sus conclusiones indicaron que factores como la debilidad del Estado, la desconfianza en la policía, la adversidad económica de posguerra y las muertes extrajudiciales derivadas de acciones policiales o mafiosas contribuyen significativamente a las tasas de homicidio del país.



2. Datos y metodología

En este estudio examinamos si existen ciertas características únicas en regiones específicas que expliquen las variaciones en los homicidios, centrándonos especialmente en la eficacia institucional y la corrupción. Siguiendo la revisión de la literatura también incluimos variables que se han utilizado para tratar de explicar las tasas de homicidio en el mundo, por lo que incluimos en nuestro modelo variables como el desempleo, el nivel educativo, la pobreza y la población urbana.

Apoyando nuestra decisión en investigaciones previas, consideramos los diseños longitudinales, en particular un modelo de efectos aleatorios, como un método apropiado para utilizar cuando se trabaja con datos de series temporales de panel y transversales (Borenstein et al., 2010; Oberwittler, 2019; Croci y Chainey, 2022). El modelo de efectos aleatorios tiene la ventaja de que permite que los verdaderos tamaños de los efectos difieran en la muestra de datos. Además, los modelos de efectos aleatorios evalúan simultáneamente los efectos entre y dentro de los países, por lo que resultan más apropiados para el análisis de nuestra muestra de datos (Tuttle, 2017; Oshio et al., 2018).

La variable dependiente es la tasa de homicidios por país, expresada como el número de homicidios cada 100.000 habitantes. Los homicidios se definen como cualquier "muerte ilegal infligida intencionadamente a una persona por otra persona" (UNODC, 2015). Los datos sobre las tasas de homicidio de todos los países se obtuvieron de la base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023). Dado que existe una variación significativa entre los niveles de homicidio por país, se aplicó una transformación logarítmica natural a los datos de homicidio para abordar la asimetría en la muestra de datos. Se trata de un

proceso habitual en los modelos multivariantes que utilizan tasas de homicidio (Messner, 1982; LaFree y Tseloni, 2006).

Se obtuvieron datos de seis variables explicativas para cada país y para cada año entre 2012 y 2021: eficacia del gobierno, control de la corrupción, desempleo, nivel educativo, pobreza y población urbana. Los datos para la eficacia del gobierno (EG) se obtuvieron del proyecto Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI) del Banco Mundial (Kaufmann y Kraay, 2023). El WGI evalúa las percepciones relativas a la calidad de los servicios públicos, la independencia de la función pública de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de las políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con estas políticas (Banco Mundial, 2023a). Cada país recibe una puntuación que oscila entre -2,5 y 2,5. La razón para seleccionar el conjunto de datos del WGI radica en su reputación como una fuente confiable y completa para analizar la gobernanza entre las naciones. Además, se ha empleado anteriormente en investigaciones para explorar cómo se relaciona la delincuencia con la eficacia institucional (por ejemplo, Eisner y Nivette, 2013; van Dijk et al., 2021; Croci y Chainey, 2022).

La medición del control de la corrupción se ha utilizado en estudios anteriores para explorar su relación con la delincuencia. Los datos de esta variable se registran en el conjunto de datos del WGI y proceden de varias de las mismas fuentes que los datos de la EG. No obstante, se ha demostrado una correlación significativa y coherente entre ambas mediciones (Chainey et al., 2021). Para evitar cualquier problema de multicolinealidad, se decidió utilizar los datos proporcionados por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI). El IPC se utiliza en una gran variedad de trabajos debido a su fiabilidad a la hora de medir la corrupción en todo el mundo (Haggard y Tiede 2011). Cabe señalar que, debido a una revisión metodológica en 2012, se descartaron los datos anteriores a ese año.

En cuanto al nivel educativo, utilizamos el Índice de Educación (IE) obtenido del Global Data Lab de la Universidad de Radboud (2023). El IE forma parte del Índice de Desarrollo Humano, y está compuesto por la integración entre la media de años de escolarización de los adultos mayores

de 25 años y los años de escolarización previstos para los niños en edad de entrar en la escuela (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2023).

Los datos sobre desempleo, pobreza y población urbana se han obtenido del Banco Mundial (2023b). Según el Banco Mundial (2023c), el desempleo se refiere a la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca activamente empleo y está disponible para trabajar. Dado que no se dispone de una medida directa de la pobreza para cada país y año, se eligió el PIB per cápita (medido en dólares estadounidenses) como indicador de la pobreza (siguiendo, por ejemplo, a Lappi-Seppälä y Lehti, 2014). Por último, en general se considera que los homicidios ocurren principalmente en zonas urbanas (Neumayer 2003; Baumer y Wolff 2014), por esta razón se incluyó en el modelo la población urbana de cada país. Los datos utilizados corresponden al porcentaje de la población total que vive en zonas urbanas.

Los métodos utilizados incluyen la ejecución de cinco modelos diferentes. El primer modelo incluye todos los países de la muestra de datos. Y para comprender las posibles variaciones regionales, se ejecutó un modelo para cada región. El conjunto de modelos se compone de un total de 90 países, 24 para América, 34 Europa, 10 África y 22 Asia y Oceanía. Descartamos una mayor desagregación regional ya que habría reducido sustancialmente la cantidad de países por región afectando a la validez externa regional del ejercicio.

Las variables independientes pueden estar correlacionadas entre sí, en particular las variables que miden las condiciones estructurales (Pridemore y Trent, 2010). Esto puede crear problemas de multicolinealidad en los modelos de regresión y puede conducir a la generación de resultados engañosos. Las correlaciones elevadas no siempre indican multicolinealidad (Eisner y Nivette, 2012), por lo que utilizamos la prueba del factor de inflación de la varianza (VIF) para comprobar la multicolinealidad de cada modelo. Un VIF elevado denota un alto grado de colinealidad entre la variable independiente y las demás variables del modelo. Un resultado de la prueba VIF superior a cinco indica un problema de multicolinealidad y el modelo debe revisarse (Paul, 2006; Champion y Hartley, 2010).



3. Resultados

La Tabla 1 muestra los estadísticos univariantes de las variables utilizadas en el análisis. Las cifras muestran una variación importante en las tasas de homicidio, con una media de 6,9, un mínimo de 0 cada 100.000 habitantes en varios países y años (por ejemplo, Luxemburgo en 2012), y un máximo de 106,8 en El Salvador, en 2015. La mayoría de las demás variables también presentan variaciones importantes. Por ejemplo, el control de la corrupción tiene una media de 52,5, un mínimo de 15 (para Myanmar en 2012) y un máximo de 92 (para Dinamarca en 2014). Por su parte, el PIB per cápita presenta una media de 22.158,6, un mínimo de 704,4 (para Ruanda en 2013) y un máximo de 133.590,1 (para Luxemburgo en 2021).

Tabla 1: Estadísticas descriptivas de cada variable

Estadística	N	Media	Desv. Est.	Min	Max
Tasa de homicidios	900	6.9	11.6	0.0	106.8
Efectividad de gobierno	900	0.5	0.8	-1.5	2.3
Control de la corrupción	900	52.5	18.8	15.0	92.0
Desempleo	900	7.9	5.1	0.1	28.8
Índice de educación	900	0.8	0.1	0.5	1.0
PBI per capita	900	22,034.8	23,526.6	704.4	133,590.1
Población urbana	900	67.4	19.6	16.9	100.0

Como prueba preliminar se preparó una matriz de correlaciones entre todos los países y variables. La Tabla 2 muestra la matriz de correlaciones entre las variables. Como era de esperar, las tasas de homicidio están significativamente correlacionadas con la mayoría de las variables ($p < 0,01$), a excepción del desempleo ($p < 0,05$). La eficacia del gobierno ($-0,33$; $p < 0,01$) y el control de la corrupción ($-0,32$; $p < 0,01$) se correlacionaron negativamente con los homicidios, lo que indica que los niveles más bajos de eficacia del gobierno y control de la corrupción se

asociaron con niveles más altos de homicidio. Asimismo, como se observó con las variables anteriores, la educación (-.33; $p < 0.01$) es otra variable significativamente correlacionada de manera negativa con las tasas de homicidio; tal y como era de esperar.

Tabla 2: Matriz de correlación de las variables independientes y su relación con los homicidios (n = 90 países)

	Tasa de homicidios	EG	C. de la corrupción	Desempleo	Educación	PBI per capita
Tasa de homicidios						
Eficacia de gobierno	-0.329***					
C. de la corrupción	-0.317***	0.922***				
Desempleo	0.091**	-0.113***	-0.076*			
Educación	-0.324***	0.754***	0.654***	-0.006		
PBI per capita	-0.292***	0.803***	0.790***	-0.220***	0.671***	
Población urbana	-0.142***	0.490***	0.448***	-0.111***	0.659***	0.525***

*Nota: * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$*

Los resultados del modelo 1 (véase la Tabla 3) muestran que la educación ($r = -5,186$, $p < 0,01$), seguida de la eficacia del gobierno ($r = -0,170$, $p < 0,05$) y la población urbana ($r = -0,012$, $p < 0,1$) fueron significativas en diferentes grados y en la dirección esperada. El modelo 2 (que incluye sólo a los países de América) también muestra que las variables más significativas son la educación ($r = -4,956$, $p < 0,01$) y la eficacia del gobierno ($r = -0,234$, $p < 0,01$), ambas en la dirección esperada. La regresión para los países europeos (modelo 3) muestra que el desempleo ($r = 0,021$, $p < 0,05$) es la única variable significativa con una relación positiva con la variable dependiente. Por su parte, la regresión para los países africanos (modelo 4) indica que la población urbana ($r = -0,046$, $p < 0,01$) tiene la mayor significación en la dirección esperada, seguida de la eficacia del gobierno ($r = -0,428$, $p < 0,1$) con una significación mucho menor. En el modelo 5, que sólo incluye los países de Asia y Oceanía, la educación ($r = -5,870$, $p < 0,01$) es la única variable significativa, con una relación negativa.

En todos los modelos, el VIF de cada variable no fue superior a 3. Estos resultados sugieren que la multicolinealidad no estaba presente en ninguno de los modelos.

Tabla 3: Regresión de panel



Variable dependiente:

Tasa de Homicidios

	(Todos los países)	(América)	(Europa)	(África)	(Asia & Oceanía)
Eficacia de gobierno	-0.170** (0.077)	-0.234*** (0.088)	-0.143 (0.156)	-0.428* (0.228)	-0.093 (0.181)
Control de corrupción	-0.003 (0.004)	-0.004 (0.004)	-0.006 (0.007)	-0.018 (0.011)	0.007 (0.009)
Desempleo	0.007 (0.006)	-0.004 (0.009)	0.021** (0.009)	0.035 (0.023)	-0.026 (0.020)
Educación	-5.186*** (0.991)	-4.956*** (1.437)	-2.507 (2.534)	2.587 (2.375)	-5.870*** (1.884)
PBI per cápita	0.00000 (0.00000)	0.00001 (0.00001)	-0.00000 (0.00000)	-0.00001 (0.00005)	-0.00000 (0.00001)
Población urbana	-0.012* (0.007)	-0.013* (0.007)	0.001 (0.010)	-0.046*** (0.017)	-0.008 (0.011)
Constante	6.123*** (0.644)	7.441*** (0.970)	2.660 (1.980)	2.334** (1.106)	5.318*** (1.136)
Observaciones	900	240	340	100	220
R ²	0.110	0.161	0.107	0.141	0.165
Ajustado R ²	0.104	0.140	0.091	0.085	0.141
F estadístico	110.555***	44.768***	40.102***	15.212**	41.988***

Nota:

* ** *** p<0.01

4. Discusión

Existen importantes variaciones en los resultados dependiendo de la muestra de países incluidos en el modelo. Para el modelo que incluye a todos los países (modelos 1), la educación es la variable más significativa que ayuda a comprender la variación en los homicidios, y es el hallazgo más sólido de este estudio. Esto coincide con investigaciones anteriores que han mostrado una relación significativa entre estas variables. Por ejemplo, los investigadores han encontrado que un aumento en la asistencia escolar puede promover la paz (Rivera, 2016), que la escolarización reduce significativamente la probabilidad de encarcelamiento y arresto (Lochner y Moretti, 2004), y que la mejora de la educación puede producir beneficios sociales significativos y es una herramienta política relevante que ayuda a reducir la delincuencia (Machin et al., 2011).

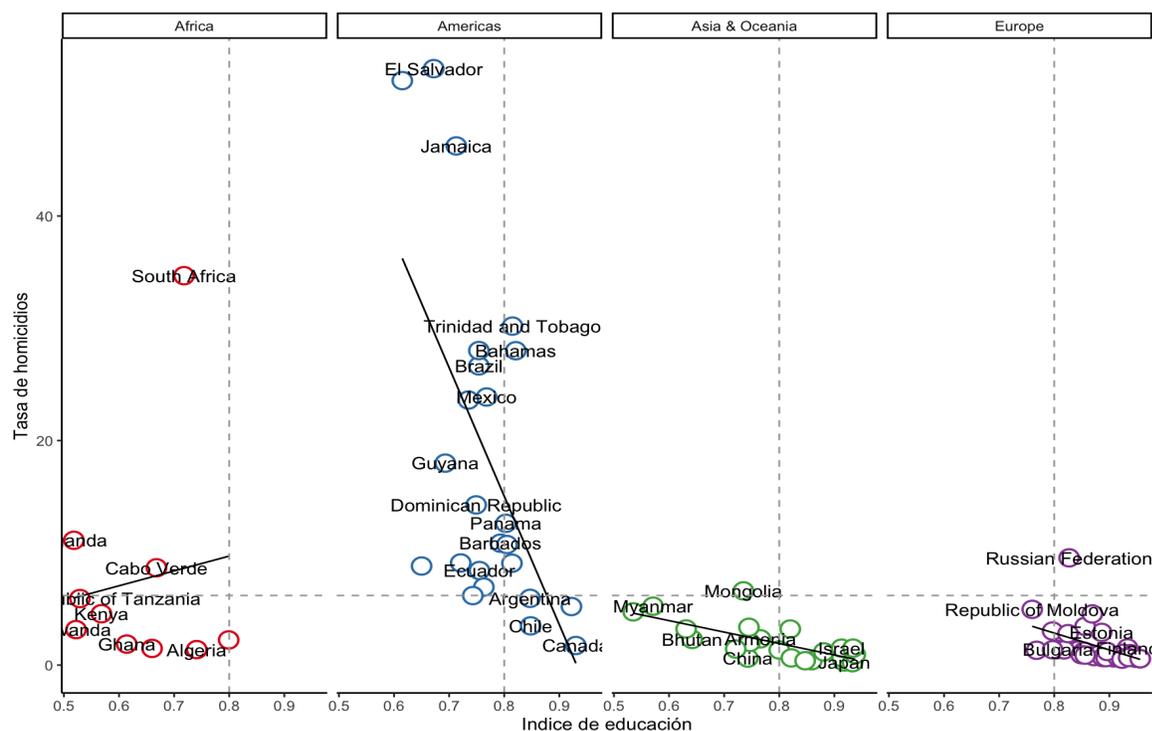
La Figura 1 muestra la relación entre los niveles educativos y las tasas de homicidio. Con la excepción de la región africana (y esto puede deberse a la pequeña muestra de países del modelo, lo que se discute en la sección de limitaciones), el modelo lineal muestra una clara relación entre estas variables en todas las regiones. En pocas palabras, las sociedades con mayores niveles de educación muestran niveles más bajos de tasas de homicidio. Invertir en una mejor educación puede lograrse de varias maneras, por ejemplo, con más años de escolarización, mejores programas educativos y planes de estudio, más financiación escolar, mejora de la edificación y la infraestructura y aumento de la experiencia y la calidad del profesorado, entre otras (Hamnett y Butler, 2017). En particular, se ha comprobado que la no finalización de los estudios, especialmente los secundarios, está fuertemente correlacionada con la delincuencia (Farrington y Hawkins, 1991; Muggah, 2017) y la violencia (Thyne, 2006). Además, los jóvenes que no estudian ni trabajan están fuertemente relacionados con el reclutamiento y la pertenencia a pandillas (Decker y Van Winkle, 2020; Pitts, 2007); si bien los

líderes de las organizaciones criminales pueden ser mayores, los jóvenes varones suelen ser los que conforman gran parte de las milicias y pandillas callejeras, entre otras entidades criminales (UNODC, 2023). Estos resultados están en consonancia con lo que los criminólogos han denominado "la curva edad-delincuencia" (Blumstein et al., 1988), que muestra que la delincuencia aumenta considerablemente durante la juventud, alcanza su punto álgido en los primeros años de la edad adulta y luego disminuye hasta la vejez. Por ejemplo, los homicidios que se producen en América Latina afectan principalmente a varones jóvenes y son perpetrados por varones jóvenes. Según el último informe de la UNODC sobre Homicidios (2019), la tasa de homicidios de adolescentes de entre 18 y 19 años alcanzó la sorprendente cifra de 46 por cada 100.000 personas en 2016. A su vez, según los datos disponibles de 68 países, en 2021, el 40% de los criminales eran jóvenes varones de entre 15 y 29 años, siendo que este grupo etario constituye solo el 12% de la población mundial (UNODC, 2023).

Los niveles educativos son importantes, sin embargo, el mecanismo de cómo pueden influir en las tasas de homicidio no está del todo claro. Podría ser simplemente que las sociedades mejor educadas son menos violentas, pero también que mantener a los individuos jóvenes "fuera de las calles", en particular durante la adolescencia, puede disminuir las tendencias criminológicas de la juventud, por ejemplo, evitando la participación en pandillas callejeras o en el crimen organizado (UNODC, 2019). En consonancia con esto último, Anderson (2014) descubrió que las regulaciones sobre la edad mínima de abandono escolar tenían un impacto notable y negativo en las tasas de detenciones por delitos contra la propiedad y violentos entre individuos de 16 a 18 años. Lochner y Moretti (2004), utilizando variaciones en las leyes estatales de escolarización obligatoria a lo largo del tiempo para abordar la endogeneidad inherente a las opciones de escolarización, descubrieron que la educación reduce significativamente la probabilidad de arresto o encarcelamiento, lo que sugiere que este efecto surge de cambios en el comportamiento delictivo más que de diferencias en las probabilidades de arresto o encarcelamiento tras el delito. Además, Huttunen et al. (2023) investigaron las admisiones a la escuela secundaria en Finlandia y descubrieron una reducción sustancial y duradera en la propensión criminal asociada con las admisiones a cualquier escuela secundaria, con efectos

que se extienden más allá de los años de matriculación. Por último, Brilli y Tonello (2018) estudiaron una reforma educativa italiana que elevó un año la edad de abandono escolar y observaron una reducción de la delincuencia debida a la incapacitación.

Figura 1: Niveles medios de Educación y tasas de homicidio (2012-2022)

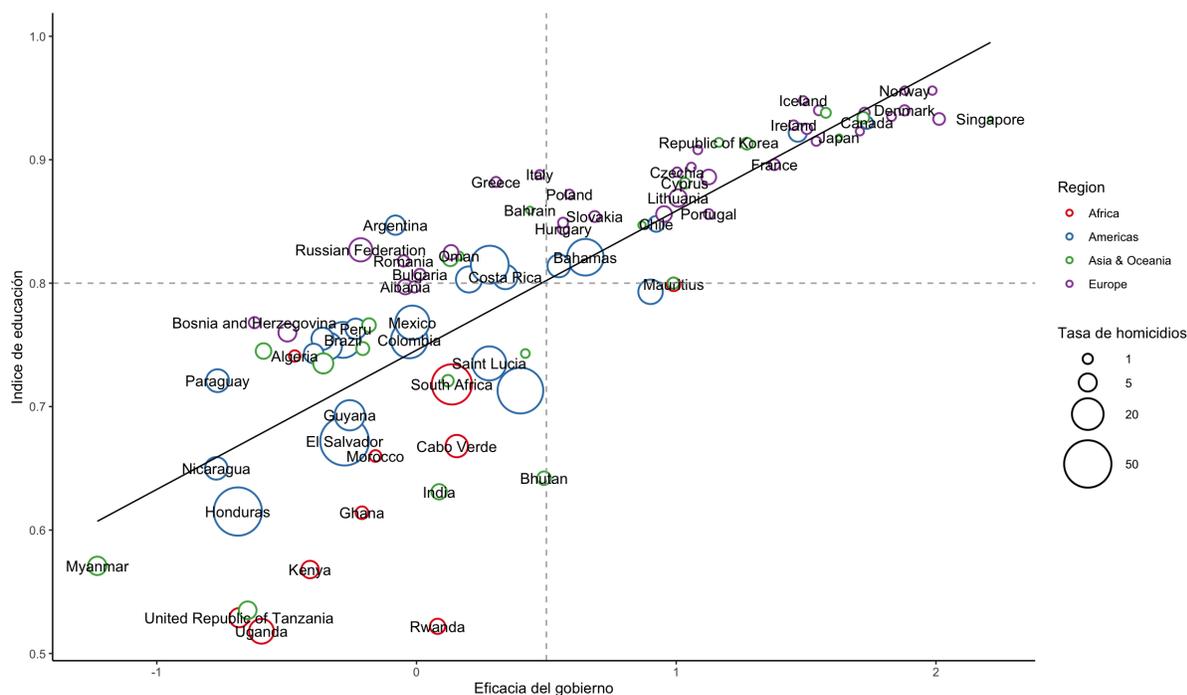


Fuente: elaboración propia basados en datos de UNDP (2023). Nota: las líneas punteadas representan el promedio de los datos.

La eficacia del gobierno es la otra variable significativa en el modelo con todos los países. Según el Banco Mundial (2020), las instituciones eficaces son aquellas que pueden prestar servicios públicos de alta calidad y que tienen un alto grado de independencia de la influencia política. La investigación actual muestra que la mejora de la eficacia institucional debe estar en el centro de la elaboración de políticas y es un factor importante en el diseño de las políticas de seguridad. La lista de recomendaciones para mejorar el funcionamiento institucional es amplia y excede de

manera importante los objetivos de la presente investigación. Sin embargo, merece la pena mencionar algunos puntos clave. Específicamente en cuanto a la efectividad de las instituciones de seguridad, la evidencia hasta la fecha muestra que los siguientes aspectos son importantes: mejores y más centralizadas capacidades administrativas que mejoren la coordinación y comunicación institucional intersectorial (CEPAL, 2018); un servicio civil profesionalizado con recursos humanos capaces (Echebarría y Cortázar, 2007; Grindle, 2010); registro efectivo y acceso oportuno a datos de buena calidad (Di Tella et al., 2010; Dammert et al., 2010), y la mejora de la gestión general de los programas y el diseño de las políticas (Frühling, 2012; Cano et al., 2020; Croci y Chainey, 2022). Además, las pruebas demuestran que la mejora en la recopilación de datos relacionados con el análisis criminológico se asocia con tasas más bajas de delitos violentos (Baltaci, 2010) y que el intercambio de información entre los organismos sanitarios, la policía y la administración local puede ayudar a reducir la delincuencia (Florence et al., 2014). En resumen, los datos parecen ser claros: a medida que los gobiernos se vuelven más eficaces y su población más educada, los niveles de violencia social disminuyen (véase la Figura 2).

Figura 2: Niveles medios de Efectividad de Gobierno y Educación (2012-2021)



Fuente: elaboración propia basados en datos del PNUD y del BM (2023). Nota: las líneas punteadas representan el promedio de los datos.

Los gobiernos disponen de recursos limitados y estos tienen que ser invertidos en una variedad de funciones sociales como el empleo, la educación, la seguridad y la salud. Es así como, aunque mejorar todas estas políticas resulta fundamental para cualquier gobierno, desde el punto de vista de las políticas públicas es central establecer prioridades. Existe un corpus de literatura académica que examina la relación entre la calidad de la educación y los demás servicios proporcionados por el Estado. Por ejemplo, con relación a la desigualdad se ha argumentado que el sistema educativo es una de las principales instituciones por las que se ha perpetuado la desigualdad, especialmente en los países menos desarrollados (Stiglitz, 1973). Esto se debe a que los niveles de educación superior se han considerado tradicionalmente como un medio para lograr una mayor igualdad a través de su papel de promoción de la movilidad social

(Brown, 2017; Blanden, 2020). Además, niveles altos de educación también tienen un impacto en el empleo, ya que los títulos de educación superior son requisitos previos típicos para un trabajo altamente remunerado y, en consecuencia, el nivel de educación debería estar correlacionado con los ingresos acumulados, que por otro lado es la base para medir la desigualdad de ingresos. Por otro lado, investigaciones previas demuestran que las personas que se gradúan y tienen acceso a una educación de calidad, tanto en primaria como en secundaria, tienen más probabilidades de encontrar un empleo remunerado, absorber el efecto de la desigualdad de ingresos, tener familias estables y ser ciudadanos y productivos para la sociedad. También son menos propensos a cometer a requerir grandes asistencias del sistema de salud pública y de asistencia social (Mitra, 2011), y es un predictor más potente de la variación de la mortalidad (Muller, 2001). En resumen, si es necesario establecer prioridades, la implicación y la inversión gubernamental a largo plazo en educación es importante, no solo porque puede reducir el crimen violento, sino porque disminuye la desigualdad, fomenta la productividad económica (McMahon, 2000) y el desarrollo (De Meulemeester y Rochat, 1995), mejora la salud pública (Hahn y Truman, 2015) y alarga la vida (Backlund et al., 1999).

Es importante destacar que, tal y como han demostrado investigaciones anteriores, los resultados muestran que la mayoría de las variables estructurales (como la pobreza y el desempleo) no fueron significativas cuando se incluyeron todos los países en el modelo. Del mismo modo, los resultados para el control de la corrupción no mostraron ninguna relación con los homicidios. Esto es sorprendente por varias razones. En primer lugar, es lógico suponer que, si las instituciones son más propensas a la corrupción, la gente puede retirar su apoyo, contribuyendo a debilitar los mecanismos formales de control (Tuttle, 2017). En segundo lugar, si las instituciones públicas (como la policía) son corruptas, son menos capaces de capturar o disuadir a los delincuentes, lo que genera impunidad. Los altos niveles de impunidad se traducen en menores riesgos de participar en actividades ilícitas y en una reducción de la probabilidad de cualquier castigo, lo que a su vez fomenta la delincuencia (BID, 2020). Como argumentó Becker (1968), la racionalidad delictiva implica que algunos individuos se convierten en delincuentes debido a los beneficios financieros del delito en comparación con el riesgo de

aprehensión y la severidad del castigo. Sin embargo, la corrupción no parece influir en las actitudes criminológicas específicamente para aquellos que están dispuestos a cometer homicidios, o al menos la relación entre estas variables no es tan directa como se esperaba.

La ilegalidad no genera necesariamente violencia, como cabría esperar, y los mercados ilegales suelen ser pacíficos (Reuter, 2009; Snyder y Duran-Martinez, 2009). Un mercado ilegal es un espacio (tanto físico como virtual) para el intercambio voluntario y regular de bienes y servicios por dinero, en el que los propios bienes y servicios, su producción, venta y/o consumo infringen la ley (Beckert & Wehinger, 2013; Beckert & Dewey, 2017). Otros, definen a los mercados ilegales con mayor simplicidad, siendo estos una red en la que un conjunto de compradores y vendedores interactúan para intercambiar bienes y servicios por dinero (Bouchard, 2007). Varios mercados ilegales pueden coexistir en la misma ubicación geográfica pudiendo estos solaparse o no. También, hay mercados ilegales definidos por redes sociales de gran alcance que pueden cubrir enormes distancias geográficas o estar centralizados en pequeños espacios. En combinación con lo anterior, las cadenas de suministro ilegales son claves para el funcionamiento de los mercados ilegales. Estas cadenas están compuestas de actividades como la adquisición, la producción, el transporte, la venta y la distribución de productos ilegales, así como procesos especializados de contrabando transnacional, lavado de dinero y corrupción de funcionarios gubernamentales; todas etapas fundamentales para el flujo mundial de bienes y servicios ilegales. La naturaleza transaccional del comercio ilícito implica un complejo conjunto de actores económicos y políticos, dinámicas de intercambio y estructuras de gobernanza, que constituyen la base de las cadenas de suministro ilícitas que habilitan la existencia de los mercados ilegales (UNODC, 2022; Europol, 2023). En este tipo de ambientes, la violencia se considera un recurso que las organizaciones delictivas utilizan para resolver conflictos, hacer cumplir acuerdos, reducir comportamientos desleales y mantener posiciones en el mercado (von Lampe, 2015). Sin embargo, el uso de violencia está lejos de ser ideal para los grupos criminales, no solo porque la violencia puede alejar potenciales clientes y consecuentemente

representa una pérdida de ingresos, sino porque llama la atención de la prensa y de las autoridades de seguridad pública.

Por otro lado, los grupos criminales tienden a usar la violencia como un recurso alternativo a la corrupción. Las organizaciones criminales pagan diversos costos por participar en cadenas de suministros y mercados ilegales, que incluyen costos de ocultación, de evasión y de corrupción, siendo este último el costo más sustancial de toda la cadena de suministro (Kassab y Rosen, 2018). Es posible que en las sociedades muy corruptas se reduzca la necesidad de recurrir a la violencia, ya que la corrupción ofrece una herramienta válida para evitarla. Sin corrupción, los mercados ilícitos serían significativamente menos resistentes, ya que los proveedores y traficantes no podrían mover sus productos y servicios a largo plazo. La literatura establece que la corrupción también puede entenderse en términos de extorsión para obtener protección, en donde la protección es un "servicio", que los gobiernos proporcionan ilegalmente. La protección estatal ilegal la proporcionan necesariamente las autoridades oficiales y, por lo tanto, implica la no aplicación o la suspensión "de facto" de la ley. Como tal, la corrupción se convierte en una herramienta que crea un espacio seguro en el que las relaciones sociales se rigen por principios extralegales (Dewey, 2017). Se podría hipotetizar entonces que cuando existen poderosos grupos criminales que controlan los mercados ilegales y tienen el monopolio de la fuerza en un territorio específico, combinado a un gobierno donde las instituciones son fáciles de corromper, los niveles de violencia tenderán a ser bajos; y en los casos donde fuera necesario el uso de violencia, la alta corrupción podría facilitar su invisibilización. Al igual que ocurre en la Ruta de los Balcanes, un importante canal de tráfico de heroína donde las tasas de homicidios son bajas, puede ocurrir que la existencia o inexistencia de homicidios no tenga vínculo con la actividad del crimen organizado. En Japón, por ejemplo, a pesar de la importante presencia del grupo criminal Yakuza, la tasa nacional de homicidios es muy baja (0,23 cada 100.000 habitantes, en 2021). En Brasil, particularmente en las zonas de São Paulo dominadas por el Primeiro Comando da Capital es donde se experimenta menor cantidad de crímenes violentos; lo mismo ha sido

observado a nivel municipal en México (UNODC, 2023). Futuras investigaciones deberían profundizar en la relación de estas variables.

La investigación empírica sobre las tasas de homicidio no solo ha mostrado resultados contradictorios a lo largo de periodos de tiempo, sino también de mediciones geográficas (Land et al., 1990). En consecuencia, llevamos a cabo un análisis regional para comprender si había especificidades de cada contexto regional que pudieran ayudar a entender las variaciones en los homicidios; en la siguiente sección se examinan esos resultados.

4.1. Análisis regional

La educación, así como la eficacia del gobierno son especialmente significativas en el modelo 2, que incluye sólo países de América. Estos resultados coinciden con estudios anteriores (Azfar, 2005; Lappi-Seppälä y Lehti, 2014; Cao y Zhang, 2017; Tebaldi y Alda, 2017; Furqan y Mahmood, 2020; Gleditsch et al., 2021; Croci y Chainey, 2022). Estas conclusiones parecen ser particularmente relevantes para América Latina, ya que es una de las regiones menos educadas (Hoffman, y Centeno, 2003) y tiene las tasas más altas de homicidio en el mundo (UNODC, 2023). La tasa de homicidios regional está por encima de los 20 casos cada 100,000 habitantes, siendo más del triple que la del promedio mundial, y acercándose a los niveles de tiempos de guerra que tienen tasas de 30 homicidios por cada 100,000 (Chioda, 2017). Para poner los números en contexto, en el 2020 fueron asesinadas 36.773 personas en México, 47.722 en Brasil y 12.247 en Colombia, llegando a una cifra cercana a los 100.000 muertos en un año (UNODC, 2023). A modo de comparación, un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2022) estimó que el total de muertes de civiles en la guerra de Siria fue de 306.887, entre marzo de 2011 y marzo de 2021. Según la UNODC (2023), desde el comienzo del siglo XXI, el crimen organizado ha provocado un significativamente mayor número de homicidios que la sumatoria de las muertes relacionadas con conflictos armados y ataques terroristas. Es así como, aunque las guerras y el terrorismo ocupan los titulares de los diarios, el 80% de la violencia letal tiene lugar fuera de las zonas de

conflicto armado (Carbonari et al., 2020). Se debería concentrar mayor énfasis en tratar de entender cómo las instituciones ineficientes generan la posible expansión del crimen organizado y de la violencia, ya que en América Latina 50% de los homicidios están relacionados a grupos criminales organizados; a nivel mundial, el 40% de los homicidios están vinculados, principalmente, al crimen organizado y a las pandillas (UNODC, 2023).

Existen varios problemas en el sistema educativo de la región, que incluyen una ralentización de las tasas de finalización de la educación secundaria, un estancamiento del acceso a la educación primaria y secundaria y una reducción de la calidad del aprendizaje. En 2019, se estima que 10,4 millones de niños y jóvenes quedaron excluidos del acceso a la educación primaria y secundaria en América Latina (UNICEF, 2022). Además, América Latina está, en promedio, 2,5 años de escolaridad por detrás del promedio de la OCDE (Bos et al., 2016). En relación con esto, desde la década de 1990 el número de jóvenes de entre 15 y 24 años que no asisten a la escuela y no trabajan ha aumentado en 2 millones, alcanzando la cifra récord de 20 millones en 2016 (De Hoyos et al., 2016). Esto es importante, ya que como se estableció previamente, los individuos jóvenes que no trabajan ni estudian son blancos fáciles para ser reclutados por las pandillas y el crimen organizado, y eventualmente, pueden terminar involucrados en actividades violentas e ilegales (Decker & Van Winkle, 2020; Pitts, 2007). Por ejemplo, un reporte de UNODC (2023) concluyó que los hombres en América Latina de 15 a 29 años tienen mayor riesgo de homicidio, con una tasa estimada de 53,6 víctimas masculinas por cada 100.000 miembros de la población masculina dentro ese rango etario, más de cinco veces la tasa mundial de homicidios masculinos de 9,3 por 100.000 habitantes de la población masculina entre 15 y 29 años.

Múltiples estudios han demostrado sistemáticamente que la calidad de la gobernanza es una variable fuertemente correlacionada para explicar las tasas de homicidio en un escenario transnacional (Lappi-Seppälä y Lehti, 2014; Cao y Zhang, 2017; Croci y Chainey, 2022). Las instituciones ineficaces, en pocas palabras, son guardianes incapaces de la seguridad, los derechos y la propiedad de los ciudadanos (Karstedt, 2014). La falta de capacidad para proteger eficazmente a la población tiene mucho que ver con la ineficacia policial, pero también con la

ineficacia del sistema judicial y penitenciario. Investigaciones anteriores han trabajado en esta línea y sugerido que la calidad de las instituciones afecta directamente a la incidencia de la violencia a través de leyes e instituciones de seguridad que refuerzan o debilitan los elementos disuasorios de la delincuencia (Eisner y Nivette, 2013; Tebaldi y Alda, 2017). En resumen, instituciones gubernamentales ineficaces pueden propiciar las condiciones para que surjan la delincuencia y los homicidios y reducir el efecto disuasorio de estas instituciones. Las instituciones de América Latina suelen considerarse ineficaces. Según los datos sobre "Eficacia del Gobierno" del Indicador Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial (Kaufmann y Kraay, 2023), la región tiene una clasificación de 50,1 sobre 100, con Haití, Venezuela, Nicaragua y Honduras en el rango del percentil 0-25 inferior. Esto contrasta con el 86,6 de los países de la OCDE, el 68,3 de Europa y Asia Central y el 57,5 de Asia Oriental y el Pacífico. En lo que respecta específicamente a las instituciones encargadas de brindar seguridad, un estudio reciente demostró que las instituciones policiales latinoamericanas, en comparación con el resto del mundo, son un 30 por ciento menos eficientes (Izquierdo et al., 2018). Los jóvenes latinoamericanos clasifican sistemáticamente a la policía como una de las instituciones públicas menos respetadas, lo cual es particularmente importante dado el vínculo bien establecido entre la distribución de edades y los homicidios. A su vez, el poder judicial es ampliamente percibido como en un estado de crisis porque no puede cumplir con sus deberes y expectativas básicas (Imbusch et al., 2011). Por ejemplo, investigadores han demostrado que la mayoría de los poderes judiciales latinoamericanos resuelven menos del 5% de los delitos graves (Ungar, 2013). Según datos de la UNODC, la tasa de condenas por cada 100 víctimas de homicidio es también la más baja de todas las regiones del mundo (UNODC, 2014), con un promedio de sólo 24 casos de homicidio que terminan en condenas por cada 100 víctimas de homicidio registradas; muy por debajo de las 48 de Asia y las 81 de Europa (UNODC, 2014; Garzón-Vergara, 2016). En algunos países de la región las tasas de impunidad por homicidios son asombrosamente altas. Por ejemplo, en México, la tasa de impunidad es de aproximadamente el 80 por ciento y, en Honduras y Brasil, el 92 por ciento de los casos de homicidio no dan lugar a una detención (OEA, 2012).

Estudios anteriores han argumentado que el nivel de desempleo (como medida de las condiciones laborales) está negativamente relacionado con las tasas de homicidio, mientras que los cambios anuales en el desempleo están positivamente relacionados con la tasa de homicidio (por ejemplo, South y Cohen, 1985; Butcher y Piehl, 1999). La conocida teoría de la “tensión” presentada por Merton (1938) es quizás la justificación teórica más citada para una correlación positiva entre las tasas de delincuencia y desempleo. La idea es que cuando las vías legítimas para alcanzar objetivos culturalmente aceptados se ven bloqueadas, o limitadas de otro modo por la contracción económica, los índices de delincuencia aumentarían. Curiosamente, el desempleo parece ser significativo sólo para los países europeos, donde los niveles de desempleo son considerablemente más bajos que en otras regiones. Es necesario ser cauteloso a la hora de interpretar estos resultados, ya que existen pruebas de que el desempleo influye en la actividad delictiva no violenta, concretamente en los delitos contra la propiedad, como el robo con allanamiento de vivienda y el robo de vehículos (Raphael y Winter-Ebmer, 2001; Edmark, 2005). Parece que la motivación de los autores de homicidios no se ve afectada por el desempleo, pero sí en el caso de los autores de delitos no violentos. Tal vez, los individuos que se quedan sin empleo estén más dispuestos a participar en delitos de motivación económica, pero no a implicarse en niveles graves de violencia; sobre todo en los países en los que abundan las oportunidades de empleo. Se debería seguir investigando esta línea de pensamiento.

En el caso de los países africanos, la eficacia del gobierno y la población urbana resultaron significativas. Este último hallazgo sugiere que el aumento de la población urbana está relacionado con una tendencia al alza de los índices de homicidios dentro de los países. De hecho, algunos académicos han argumentado que existe una relación sustancial entre el tamaño de la ciudad y el crimen (Glaeser, 1999). Las variables demográficas son generalmente reivindicadas como predictores de la desorganización social, siendo la urbanización rápida y desorganizada uno de los factores citados en el aumento de la violencia en una sociedad (Neumayer, 2003). Diversos estudios han sugerido que las características de la urbanización en las sociedades modernas, como la heterogeneidad de las estructuras sociales, son factores que influyen en el crecimiento de diversas formas de delincuencia, incluidos los homicidios (Loureiro

y Silva, 2012). Por ejemplo, un reporte reciente de UNODC (2023) afirma que el homicidio puede intensificarse cuando la urbanización se produce de forma rápida e irregular, y cuando la misma refuerza la segregación territorial con poco apoyo de los servicios públicos. Esto tiene sentido en ciudades africanas, particularmente en África Subsahariana, donde existen procesos más rápidos de urbanización desorganizada.

Los resultados de este estudio confirman parcialmente las afirmaciones de que hay más posibilidades de que se cometan delitos, especialmente violentos, en los entornos urbanos que en los rurales, ya que existen menos conexiones sociales, más posibilidades de llevar a cabo el crimen y menos posibilidades de ser detenido y castigado (Glaeser y Sacerdote, 1999). Sin embargo, la interpretación de estos modelos debe tomarse con cautela, ya que los datos sociodemográficos y criminales son muy escasos, a lo que se suma el hecho de que la muestra de países es pequeña. Especialmente en lo que respecta a los homicidios, algunos países carecen tanto de estadísticas precisas sobre mortalidad como de datos fiables sobre justicia penal (ONUDD, 2019). Como tal, es un reto determinar el alcance de los homicidios y los patrones de largo plazo que pueden estar afectando a esta región.

Los países de Asia y Oceanía representan un panorama más complejo. La educación y el desempleo parecen estar relacionados con las tendencias de los homicidios. Sin embargo, el desempleo en esta región es relativamente bajo. Precisamente desde 1990 hasta 2017 fue la región con menor tasa de desempleo del mundo, con un máximo de 4.5% y un mínimo de 2.6%. En contraposición, en el mismo período, la Unión Europea y América Latina y el Caribe alcanzaron cifras máximas de 11.4% y 10%, y mínimas de 7.2% y 6%, respectivamente. En la actualidad, los datos mantienen la misma relación: 9.3% (América Latina), 7% (Unión Europea) y 4.4% (Asia y Oceanía) (World Bank, 2023d). La relación puede estar más marcada por el desempleo juvenil ya que hay aproximadamente 750 millones de mujeres y hombres de 15 a 24 años en esta región (UNESCAP, 2023) que enfrentan vulnerabilidades y desigualdades en el mercado laboral, con más probabilidades de estar desempleados que los adultos, y con altas tasas de empleo informal (International Labour Organization, s.f.). La relación entre juventud y

violencia ya ha sido detallada en párrafos anteriores, y es válida también para esta región. Por otro lado, y como se ha mencionado anteriormente, la educación parece ser fundamental, ya que puede abordar la violencia y varios otros problemas sociales. Como tal, se puede concluir que los niveles de educación parecen ser más significativos en estas regiones, sin embargo, debido a las grandes diferencias (tamaño poblacional y económico, cultura, entre otras) que existen en esta región, es necesario un análisis subregional aún más profundo. Por ejemplo, la tasa bruta de matriculación terciaria en los países de mayores ingresos de la región supera el 70%, mientras que en los países de menores ingresos en la región es del 10%. Si a esto último se agregan las dificultades generadas por el mercado laboral y la falta de coordinación entre la educación y este, podría llegar a generarse una población de jóvenes que no hacen ni una cosa ni la otra (UN, 2023); la combinación de estos factores podrían ser una fuente de posibles miembros de organizaciones criminales. 

5. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Las estadísticas globales ocultan una realidad extremadamente heterogénea, porque las diferencias no son simplemente regionales, sino también intra-nacionales. Por ejemplo, en América Latina, no son los países más pobres (Paraguay o Bolivia), ni las provincias o estados más pobres dentro de los países (por ejemplo, los estados más pobres de México o Brasil) los más violentos. En muchos casos ocurre lo contrario: se observa que algunos de los estados y ciudades más ricos son los más violentos (como en los casos de Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Medellín o Caracas). Las diferencias también son marcadas en función del género, la edad o la etnia, y la violencia se da en sociedades extremadamente fragmentadas y

heterogéneas (Bergman y Whitehead, 2009). En consecuencia, las investigaciones futuras deberían llevar el análisis al nivel subnacional e, idealmente, al nivel micro para comprender si el mecanismo criminológico se mantiene en contextos muy específicos. Del mismo modo, futuras investigaciones deberían examinar si las conclusiones del presente estudio también son evidentes para otros tipos de delitos, tanto violentos (como la violencia doméstica y el robo), como no violentos (por ejemplo, los robos en propiedades residenciales y comerciales). Sin embargo, el primer paso para lograr cualquiera de estos objetivos es la recopilación de datos, sobre todo para los países de renta media y baja.

Desde el punto de vista de las políticas y la prevención de la delincuencia, se necesitan más datos. Los datos globales sobre la delincuencia y las características económicas y sociales de los países han mejorado en los últimos años en términos de calidad y desglose. Sin embargo, como se muestra en este estudio, aún quedan vacíos sustanciales. La necesidad de disponer de datos fiables y completos es fundamental para comprender plenamente los distintos tipos de homicidio y sus causas. 

6. Conclusiones

Este trabajo avanza en la literatura sobre el crimen investigando qué variables están más asociadas a las tasas de homicidio desde una perspectiva global, e investigando si existen diferencias entre regiones. Muchos investigadores han considerado que la delincuencia y la violencia eran síntomas de la fase inicial de desarrollo de un país que podían resolverse con crecimiento económico y reducciones de condiciones estructurales como la pobreza o el desempleo. Los resultados de este estudio apoyan parcialmente esta lógica, concretamente, encontramos que la mejora de la educación y el aumento de las oportunidades educativas pueden tener un impacto significativo en los homicidios, independientemente de la región.

Además, los resultados muestran que las capacidades institucionales son importantes cuando se trata de reducir los niveles de homicidio, en particular para América Latina. Como tal, los esfuerzos del gobierno para fortalecer su eficacia y capacidad son importantes para promover niveles más bajos de violencia social. Además, encontramos que algunas variables comúnmente estudiadas (como la pobreza y el desempleo) y nuevas variables (como la corrupción), no parecen tener un impacto significativo en las tasas de homicidio a nivel mundial o regional. Parece que las causas de la delincuencia (y en particular de los homicidios) dependen del contexto. Los homicidios son muy sensibles, por ejemplo, a la violencia política, la guerra civil, los movimientos guerrilleros, la violencia rural, los mercados ilegales y al crimen organizado. Por lo tanto, la eficacia de una política de reducción de homicidios depende de entender el contexto.

Uno de los principales objetivos de esta investigación era entender la importancia de la eficacia de los gobiernos, y de ser necesario poner el énfasis en la importancia de mejorar la capacidad institucional. Con ello, argumentamos que las políticas destinadas a reducir la delincuencia y los homicidios deberían considerar, en primer lugar, la mejora de las instituciones en los países con instituciones débiles como requisito previo para la reducción de la delincuencia. Esto debería llevarse a cabo incluso antes de intentar establecer nuevas agendas de seguridad y estrategias policiales. Las investigaciones futuras deberían estudiar en profundidad el funcionamiento del sistema de justicia penal en su conjunto y las formas de mejorarlo. Por último, los investigadores y los diseñadores de políticas de seguridad harían bien en incorporar y comprender las capacidades institucionales en sus intentos por reducir la delincuencia.



Referencias

- Alda, E. (2017). Drivers of Homicide in Latin America and the Caribbean: Does Relative Political Capacity Matter? *The Handbook of Homicide*, 432-450.
- Altbeker, A. (2008). Murder and robbery in South Africa: A tale of two trends. *Crime, violence and injury prevention in South Africa: data to action. Tygerberg: MRC-UNISA Crime, Violence and Injury Lead Programme*, 122-49.
- AmericasBarometer. (2023). *LAPOP's 2023 AmericasBarometer takes the Pulse of Democracy*. LAPOP.
- Anderson, D. M. (2014). In school and out of trouble? The minimum dropout age and juvenile crime. *Review of Economics and Statistics*, 96(2), 318-331.
- Arif, I., Jawaid, S. T. y Iqbal, S. (2017). Dynamics of homicide rates in Asian countries: A quantitative study. *Abasyn Journal of Social Sciences*, 10(1), 149-162.
- Asongu, S. A. y Acha-Anyi, P. N. (2019). The murder epidemic: A global comparative study. *International Criminal Justice Review*, 29(2), 105-120.
- Austin, R. L. y Kim, Y. S. (1999). Educational development and homicide in Sub-Saharan Africa. *Homicide Studies*, 3(1), 78-98.
- Azfar, O. (2005). Government Effectiveness and Homicides. *Available at SSRN 720281*.
- Backlund, E., Sorlie, P. D. y Johnson, N. J. (1999). A comparison of the relationships of education and income with mortality: The National Longitudinal Mortality Study. *Social science & medicine*, 49(10), 1373-1384.
- Bailey, W. C. (1984). Poverty, inequality, and city homicide rates: Some not so unexpected findings. *Criminology*, 22(4), 531-550.
- Baltaci, H. (2010). *Crime analysis: An empirical analysis of its effectiveness as a crime fighting tool*. The University of Texas at Dallas.
- Baumer, E. P. y Wolff, K. T. (2014). Evaluating contemporary crime drop (s) in America, New York City, and many other places. *Justice Quarterly*, 31(1), 5-38.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of political economy*, 76(2), 169-217.
- Beckert, J. y Wehinger, F. (2013). In the shadow: Illegal markets and economic sociology. *Socio-Economic Review*, 11(1), 5-30.

-
- Beckert, J. y Dewey, M. (2017). The social organization of illegal markets. *The architecture of illegal markets: Towards an economic sociology of illegality in the economy*, 1-38.
- Bergman, M. y Whitehead, L. (2009). *Criminality, public security, and the challenge to democracy in Latin America*. University of Notre Dame Press.
- Bergman, M., Ambrogi, J., Bruno, M., Croci, G. y Prueger, E.A., (2023). Estudio sobre homicidios en Argentina: un análisis del periodo 2001-2021. Buenos Aires: Universidad de Tres de Febrero.
- Blanden, J. (2020). Education and inequality. In *The economics of education* (pp. 119-131). Academic Press.
- Blumstein, A., Cohen, J. y Farrington, D. P. (1988). Criminal career research: Its value for criminology. *Criminology*, 26(1), 1-35.
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. y Rothstein, H. R. (2010). A basic introduction to fixed-effect and random-effects models for meta-analysis. *Research synthesis methods*, 1(2), 97-111.
- Bos, M. S., Elías, A., Vegas, E. y Zoido, P. (2016). Latin America and the Caribbean in PISA 2015: How Did the Region Perform?
- Bouchard, M. (2007). On the resilience of illegal drug markets. *Global crime*, 8(4), 325-344.
- Briceño-León, R., Villaveces, A. y Concha-Eastman, A. (2008). Understanding the uneven distribution of the incidence of homicide in Latin America. *International journal of epidemiology*, 37(4), 751-757.
- Brilli, Y. y Tonello, M. (2018). Does increasing compulsory education decrease or displace adolescent crime? New evidence from administrative and victimization data. *CESifo Economic Studies*, 64(1), 15-49.
- Broadhurst, R. (2002). Lethal violence, crime and state formation in Cambodia. *Australian & New Zealand journal of criminology*, 35(1), 1-26.
- Broadhurst, R. y Bouhours, T. (2009). Policing in Cambodia: legitimacy in the making? In *Community Policing and Peacekeeping* (pp. 359-378). Routledge.
- Brown, P. (2017). Education, opportunity and the prospects for social mobility. In *Education and Social Mobility* (pp. 60-82). Routledge.
- Butcher, K. F. y Piehl, A. M. (1999). Cross-city evidence on the relationship between immigration and crime. *Journal of Policy Analysis and Management*, 17(3), 457-493.

Cano, I., Rojido, E. y Borges, D. (2020). Guía de evaluación para programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe. *Laboratório de Análise da Violência, Universidade do Estado do Rio de Janeiro*.

Cao, L. y Zhang, Y. (2017). Governance and regional variation of homicide rates: Evidence from cross-national data. *International journal of offender therapy and comparative criminology*, 61(1), 25-45.

Carbonari, F., Willman, A., Manolio, F., Reinach, S. y Marques, D. (2020). A Review of the Evidence and a Global Strategy for Violence Prevention. *Pathfinders*.

CEPAL. (2018). *Latin American economic outlook 2018: Rethinking institutions for development*. CEPAL.

Chainey, S. P., Croci, G. y Rodriguez Forero, L. J. (2021). The influence of government effectiveness and corruption on the high levels of homicide in Latin America. *Social Sciences*, 10(5), 172.

Champion, D. J. y Hartley, R. D. (2010). Statistics for criminal justice and criminology. (*No Title*).

Chintrakarn, P. y Herzer, D. (2012). More inequality, more crime? A panel cointegration analysis for the United States. *Economics Letters*, 116(3), 389-391.

Chioda, L. (2017). *Stop the violence in Latin America: a look at prevention from cradle to adulthood*. World Bank Publications.

Croci, G. y Chainey, S. (2023). An Institutional Perspective to Understand Latin America's High Levels of Homicide. *The British Journal of Criminology*, 63(5), 1199-1218.

Daly, M., Wilson, M. y Vasdev, S. (2001). Income inequality and homicide rates in Canada and the United States. *Canadian Journal of Criminology*, 43(2), 219-236.

Dammert, L., Salazar, F., Montt, C. y González, P. (2010). Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas. *FLACSO-Chile/Banco Interamericano de Desarrollo (BID)*.

Kaufmann, D. y Kraay, A. (2023). Worldwide Governance Indicators, 2023 Update. Recuperado de: www.govindicators.org

Dawson, A. (2017). The belief in state legitimacy and homicide: A cross-national analysis. *The Sociological Quarterly*, 58(4), 552-575.

De Hoyos, R., Rogers, H. y Székely, M. (2016). *Out of School and Out of Work: Risk and Opportunities for Latin America's Ninis*. Washington, DC: World Bank. Recuperado de: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22349>

De Meulemeester, J. L. y Rochat, D. (1995). A causality analysis of the link between higher education and economic development. *Economics of education review*, 14(4), 351-361.

Decker, S. H. y Van Winkle, B. (2020). Life in the gang: Family, friends, and violence. In *Crime, Inequality and the State* (pp. 338-352). Routledge.

Dewey, M. (2017). La demanda de productos ilegales. Elementos para explicar los intercambios ilegales desde la perspectiva de la sociología económica. *Papeles de trabajo: La revista electrónica del IDAES*, 11(20), 39-58.

Di Tella, R., Edwards, S. y Schargrodsky, E. (Eds.). (2010). *The economics of crime: Lessons for and from Latin America*. University of Chicago Press.

Echebarría, K. y Cortázar, J. C. (2007). Public administration and public employment reform in Latin America. *The state of state reform in Latin America*, 123-156.

Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection? *Scandinavian Journal of Economics*, 107(2), 353-373.

Eisner, M. (2001). Modernization, self-control and lethal violence. The long-term dynamics of European homicide rates in theoretical perspective. *British journal of criminology*, 41(4), 618-638.

Eisner, M. y Nivette, A. (2012). How to reduce the global homicide rate to 2 per 100,000 by 2060. *The future of criminology*, 219-228.

Eisner, M. y Nivette, A. (2013). Does low legitimacy cause crime? A review of the evidence. *Legitimacy and criminal justice: An international exploration*, 308-325.

Elias, N. (1939). *The Civilizing Process*. New York: Urizen Books.

Europol. (2023). *European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023 - The Other Side of the Coin: An Analysis of Financial and Economic Crime*. Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N. (2001). Inequality and violent crime. Forthcoming in the. *Journal of Law and Economics*.

Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N. (2002a). Inequality and violent crime. *The journal of Law and Economics*, 45(1), 1-39.

Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N. (2002b). What causes violent crime? *European economic review*, 46(7), 1323-1357.

Farrington, D. P., & Hawkins, J. D. (1991). Predicting participation, early onset and later persistence in officially recorded offending. *Criminal behaviour and mental health*, 1(1), 1-33.

Fella, G. y Gallipoli, G. (2014). Education and crime over the life cycle. *The Review of Economic Studies*, 81(4), 1484-1517.

Florence, C., Shepherd, J., Brennan, I. y Simon, T. R. (2014). An economic evaluation of anonymised information sharing in a partnership between health services, police and local government for preventing violence-related injury. *Injury Prevention*, 20(2), 108-114.

Frühling, H. (2012). La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Cómo medirla y cómo mejorarla.

Furqan, M. y Mahmood, H. (2020). Does education reduce homicide? A panel data analysis of Asian region. *Quality & Quantity*, 54(4), 1197-1209.

Garzón-Vergara, J. C. (2016). *What is the relationship between organized crime and homicide in Latin America?* Igarape Institute.

Glaeser, E. L. (1999). An overview of crime and punishment. *Washington: World Bank. Mimeographed.*

Glaeser, E. L. y Sacerdote, B. (1999). Why is there more crime in cities? *Journal of political economy*, 107(S6), S225-S258.

Global Data Lab. (2023). *Subnational HDI (v7.0): Educational index*. Recuperado de Global Data Lab: <https://globaldatalab.org/shdi/table/edindex/?levels=1&interpolation=0&extrapolation=0>

Goh, L. T. y Law, S. H. (2023). The crime rate of five Latin American countries: Does income inequality matter? *International Review of Economics & Finance*, 86, 745-763.

Grindle, M. S. (2010). Constructing, deconstructing, and reconstructing career civil service systems in Latin America. *HKS Faculty Research Working Paper Series*.

Haggard, S. y Tiede, L. (2011). The rule of law and economic growth: where are we? *World development*, 39(5), 673-685.

Hahn, R. A. y Truman, B. I. (2015). Education improves public health and promotes health equity. *International journal of health services*, 45(4), 657-678.

Hamnett, C. y Butler, T. (2017). Distance, education and inequality. In *Space, place and scale in the study of education* (pp. 61-74). Routledge.

Hazra, D. y Aranzazu, J. (2022). Crime, correction, education and welfare in the US—What role does the government play? *Journal of policy modeling*, 44(2), 474-491.

Hoffman, K. y Centeno, M. A. (2003). The lopsided continent: inequality in Latin America. *Annual Review of Sociology*, 29(1), 363-390.

Howlett, M. (2014). Policy design: What, who, how and why. *L'instrumentation de l'action publique: Controverses, résistances, effets*, 281-316.

Hsieh, C. C. y Pugh, M. D. (1993). Poverty, income inequality, and violent crime: a meta-analysis of recent aggregate data studies. *Criminal justice review*, 18(2), 182-202.

Huttunen, K., Pekkarinen, T., Uusitalo, R. y Virtanen, H. (2023). Lost boys? Secondary education and crime. *Journal of Public Economics*, 218, 104804.

IDB. (2020). *Transparency and Integrity Sector Framework Document*. Washington DC: IDB.

International Labour Organization [ILO]. (s.f.). *Youth employment in Asia and the Pacific*. Recuperado de: <https://www.ilo.org/asia/areas/youth-employment/lang--en/index.htm#banner>

Imbusch, P., Misse, M. y Carrión, F. (2011). Violence research in Latin America and the Caribbean: A literature review. *International Journal of Conflict and Violence (IJCV)*, 5(1), 87-154.

-
- Izquierdo, A., Pessino, C. y Vuletin, G. (Eds.). (2018). *Better spending for better lives: how Latin America and the Caribbean can do more with less* (Vol. 10). Inter-American Development Bank.
- Jaitman, L. (2017). The costs of crime and violence. *Inter-American Development Bank*.
- Jaitman, L. y Ajzenman, N. (2016). *Crime concentration and hot spot dynamics in Latin America* (No. IDB-WP-699). IDB Working Paper Series.
- Jonck, P., Goujon, A., Testa, M. R. y Kandala, J. (2015). Education and crime engagement in South Africa: A national and provincial perspective. *International Journal of Educational Development*, 45, 141-151.
- Karstedt, S. (2014). Organizing crime: The state as agent en L. Paoli (Ed.), *The Oxford Handbook of Organized Crime* (edición online). Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.013.031>
- Kassab, H. S. y Rosen, J. D. (2018). *Illicit markets, organized crime, and global security*. Springer.
- Koeppel, M. D., Rhineberger-Dunn, G. M. y Mack, K. Y. (2015). Cross-national homicide: A review of the current literature. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 39(1), 47-85.
- LaFree, G. y Tseloni, A. (2006). Democracy and crime: A multilevel analysis of homicide trends in forty-four countries, 1950-2000. *The annals of the American academy of political and social science*, 605(1), 25-49.
- Land, K. C., McCall, P. L. y Cohen, L. E. (1990). Structural covariates of homicide rates: Are there any invariances across time and social space? *American journal of sociology*, 95(4), 922-963.
- Lappi-Seppälä, T. y Lehti, M. (2014). Cross-comparative perspectives on global homicide trends. *Crime and justice*, 43(1), 135-230.
- Lederman, D., Loayza, N. y Menéndez, A. M. (2002). Violent crime: does social capital matter? *Economic Development and Cultural Change*, 50(3), 509-539.
- Lee, M. T., Martinez, R. y Rosenfeld, R. (2001). Does immigration increase homicide? Negative evidence from three border cities. *The Sociological Quarterly*, 42(4), 559-580.
- Lester, D. (1992). Unemployment, suicide and homicide in metropolitan areas. *Psychological reports*, 71(2), 558-558.
- Lochner, L. y Moretti, E. (2004). The effect of education on crime: Evidence from prison inmates, arrests, and self-reports. *American economic review*, 94(1), 155-189.
- Loureiro, P. R. A. y Silva, E. C. (2012). What causes intentional homicide? *Journal of International Development*, 24(3), 287-303.
- Lustig, N. (2015). The redistributive impact of government spending on education and health: Evidence from thirteen developing countries in the commitment to equity project. In *Inequality and fiscal policy*. International Monetary Fund.
- Machin, S., Marie, O. Vujić, S. (2011). The crime reducing effect of education. *The Economic Journal*, 121(552), 463-484.
- Malešević, S. (2017). *The rise of organised brutality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185-213.
- McCall, P. L., Nieuwebeerta, P., Engen, R. L. y Thames, K. M. (2012). Explaining variation in homicide rates across Eastern and Western European cities: The effects of social, political, and economic forces. *Handbook of European homicide research: patterns, explanations, and country studies*, 137-154.

-
- McClelland, J. S. (1996). *A history of western political thought*. London: Routledge.
- McGuinn, B. (2015). In the name of Vindice: Latin America's Endemic Pattern of violence. A conceptual analysis. In R. & Bagley, *Reconceptualizing security in the Americas in the twenty-first century*. Lexington Books.
- McMahon, W. W. (2000). *Education and development: Measuring the social benefits*. Clarendon Press.
- Merton, R. K. (1938). Science and the social order. *Philosophy of science*, 5(3), 321-337.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Messner, S. F. (1982). Poverty, inequality, and the urban homicide rate: Some unexpected findings. *Criminology*, 20(1), 103-114.
- Mitra, D. (2011). The social and economic benefits of public education. *Pennsylvania State University*.
- Morenoff, J. D., Sampson, R. J. y Raudenbush, S. W. (2001). Neighborhood inequality, collective efficacy, and the spatial dynamics of urban violence. *Criminology*, 39(3), 517-558.
- Muggah, R. (2017). The rise of citizen security in Latin America and the Caribbean. In *Alternative pathways to sustainable development: Lessons from Latin America* (pp. 291-322). Brill Nijhoff.
- Muller, A. (2002). Education, income inequality, and mortality: a multiple regression analysis. *Bmj*, 324(7328), 23.
- Neapolitan, J. L. (1994). Cross-national variation in homicides: The case of Latin America. *International Criminal Justice Review*, 4(1), 4-22.
- Neumayer, E. (2003). Good policy can lower violent crime: Evidence from a cross-national panel of homicide rates, 1980-97. *Journal of Peace Research*, 40(6), 619-640.
- Nivette, A. E. (2011). Cross-national predictors of crime: A meta-analysis. *Homicide Studies*, 15(2), 103-131.
- Nivette, A. E. (2012). Spatial patterns of homicide and political legitimacy in Europe. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 36(3), 155-171.
- Nivette, A. E. (2014). Legitimacy and crime: Theorizing the role of the state in cross-national criminological theory. *Theoretical Criminology*, 18(1), 93-111.
- Nivette, A. E. y Eisner, M. (2013). Do legitimate polities have fewer homicides? A cross-national analysis. *Homicide Studies*, 17(1), 3-26.
- OAS. (2012). Alerta América (2012), *Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas: Estadísticas oficiales de Seguridad Ciudadana producidas por los Estados miembros de la OEA*. Washington DC: OAS.
- Oberwittler, D. (2019). Lethal violence: A global view on homicide. In *Oxford research encyclopedia of criminology and criminal justice*. Oxford University Press.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2022). *La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calcula que más de 306.000 civiles han perdido la vida durante los 10 años del conflicto en Siria*. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/06/un-human-rights-office-estimates-more-306000-civilians-were-killed-over-10>
- Oshio, A., Taku, K., Hirano, M. y Saeed, G. (2018). Resilience and Big Five personality traits: A meta-analysis. *Personality and individual differences*, 127, 54-60.
- Ouimet, M. (2012). A world of homicides: The effect of economic development, income inequality, and excess infant mortality on the homicide rate for 165 countries in 2010. *Homicide Studies*, 16(3), 238-258.

-
- Outwater, A. H., Campbell, J. C., Mgya, E., Abraham, A. G., Kinabo, L., Kazaura, M. y Kub, J. (2008). Homicide death in Dar es Salaam, Tanzania 2005. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 15(4), 243-252.
- Outwater, A., Campbell, J. C., Webster, D. y Mgya, E. (2007). Homicide deaths in sub-Saharan Africa: a review 1970-2004. *African Safety Promotion*, 5(1), 31-44.
- Paul, R. K. (2006). Multicollinearity: Causes, effects and remedies. *IASRI, New Delhi*, 1(1), 58-65.
- Pearce, J. (2010). Perverse state formation and securitized democracy in Latin America. *Democratization*, 17(2), 286-306.
- Pitts, J. (2007). Reluctant gangsters: youth gangs in Waltham Forest. *Unpublished internal document*.
- Ponce, A. F. (2016). Cárteles de droga, violencia y competitividad electoral a nivel local: Evidencia del caso mexicano. *Latin American Research Review*, 51(4), 62-85.
- Pratt, T. C. y Godsey, T. W. (2003). Social support, inequality, and homicide: A cross-national test of an integrated theoretical model. *Criminology*, 41(3), 611-644.
- Pridemore, W. A. (2011). Poverty matters: A reassessment of the inequality–homicide relationship in cross-national studies. *The British Journal of Criminology*, 51(5), 739-772.
- Pridemore, W. A. y Trent, C. L. (2010). Do the invariant findings of Land, McCall, and Cohen generalize to cross-national studies of social structure and homicide? *Homicide Studies*, 14(3), 296-335.
- Quiroz Félix, J., Castillo Ponce, R. A., Ocegueda Hernández, J. M. y Varela Llamas, R. (2015). Criminal and Economic Activity in Mexico. *Norteamérica*, 10(2), 187-209.
- Raphael, S. y Winter-Ebmer, R. (2001). Identifying the effect of unemployment on crime. *The journal of law and economics*, 44(1), 259-283.
- Rennó Santos, M., Testa, A. y Weiss, D. B. (2018). Where poverty matters: Examining the cross-national relationship between economic deprivation and homicide. *The British Journal of Criminology*, 58(2), 372-393.
- Reuter, P. (2009). Systemic violence in drug markets. *Crime, law and social change*, 52, 275-284.
- Rivera, M. (2016). The sources of social violence in Latin America: An empirical analysis of homicide rates, 1980–2010. *Journal of Peace Research*, 53(1), 84-99.
- Rossow, I. (2004). Alcohol consumption and homicides in Canada, 1950–1999. *Contemporary Drug Problems*, 31(3), 541-559.
- Rotberg, R. I. (2003). Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators. *State failure and state weakness in a time of terror*, 1, 25.
- Saleemi, M. W. y Amir-ud-Din, R. (2019). How does quality of governance influence occurrence of crime? A longitudinal analysis of Asian countries.
- Schilling, H. (1999). *Die neue Zeit: vom Christenheitseuropa zum Europa der Staaten, 1250 bis 1750 (Vol. 3)*. Siedler.
- Schuppert, G. F. (2011). Law without a state? *Governance Without a State? Policies and Politics in Areas of Limited Statehood*, 65-86.
- Seedat, M., Van Niekerk, A., Jewkes, R., Suffla, S. y Ratele, K. (2009). Violence and injuries in South Africa: prioritising an agenda for prevention. *The Lancet*, 374(9694), 1011-1022.
- Shaw, C. R. y McKay, H. D. (1942). *Juvenile delinquency and urban areas*. University of Chicago Press.

-
- Skrede Gleditsch, K., Rivera, M. y Zarate Tenorio, B. A. (2021). Can Education Reduce Violent Crime? Evidence from Mexico before and after the Drug War Onset.
- Snyder, R. y Duran-Martinez, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. *Crime, law and social change*, 52, 253-273.
- Soares, R. R. (2004). Development, crime and punishment: accounting for the international differences in crime rates. *Journal of development Economics*, 73(1), 155-184.
- South, S. J. y Cohen, L. E. (1985). Unemployment and the homicide rate: A paradox resolved? *Social Indicators Research*, 17, 325-343.
- Stamatel, J. P. (2009). Correlates of national-level homicide variation in post-communist East-Central Europe. *Social Forces*, 87(3), 1423-1448.
- Stamatel, J. P. (2016). Democratic cultural values as predictors of cross-national homicide variation in Europe. *Homicide Studies*, 20(3), 239-256.
- Stiglitz, J. E. (1973). Education and inequality. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 409(1), 135-145.
- Tebaldi, E. y Alda, E. (2017). Quality of Institutions and Violence Incidence: A Cross-Country Analysis. *Atlantic Economic Journal*, 45, 365-384.
- Thyne, C. L. (2006). ABC's, 123's, and the golden rule: The pacifying effect of education on civil war, 1980–1999. *International Studies Quarterly*, 50(4), 733-754.
- Tilly, C. (2017). War making and state making as organized crime. In *Collective violence, contentious politics, and social change* (pp. 121-139). Routledge.
- Tuttle, J. (2017). Murder in the shadows: evidence for an institutional legitimacy theory of crime. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*.
- Ungar, M. (2013). The rot within: Security and corruption in Latin America. *social research*, 80(4), 1187-1212.
- UNICEF. (2022). *Education in Latin America and the Caribbean at a crossroads: Regional monitoring report SDG4-Education 2030*. UNESCO Publishing.
- United Nations Development Programme [UNDP]. (2023). *Human Development Reports: Human Development Index*. Recuperado de: <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [UNESCAP]. (2023). *Regional overview: youth in Asia and the Pacific*. Tailandia: UNESCAP.
- UNODC. (2014). *Global Study on Homicides 2013*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2015). *International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) – Version 1.0*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2019). *Global Study on Homicide: Executive summary*. Vienna: UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>
- UNODC. (2022). *Illicit Financial Flows from Trafficking of Opiates Along the Northern Route*. Vienna: UNODC.
- UNODC. (2023), *Victims of intentional homicide*. Recuperado de: <https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims>

-
- UNODC. (2023). *Global Study on Homicides 2023*. Vienna: UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>
- van Dijk, J., Nieuwbeerta, P. y Joudo Larsen, J. (2021). Global crime patterns: An analysis of survey data from 166 countries around the world, 2006–2019. *Journal of quantitative criminology*, 1-36.
- Von Lampe, K. (2015). *Organized crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. Sage Publications.
- Wang, T. y Stamatel, J. P. (2019). Cross-national differences in female offending and criminal justice processing. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 43(3), 219-239.
- Whitehead, N. L., Fair, J. E. y Payne, L. A. (2010). *Violent Democracies in Latin America*. Durham: Duke University Press.
- Wille, C. (2006). Finding the evidence: The links between weapon collection programmes, gun use and homicide rates in Cambodia. *African Security Studies*, 15(2), 57-73.
- World Bank. (2023a). *Worldwide Governance Indicators: Frequently Asked Questions*. Recuperado de: <https://www.govindicators.org/frequently-asked-questions>
- World Bank. (2023b). *World Bank Open Data*. Recuperado de World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/>
- World Bank. (2023c). *DataBank: Metadata Glossary*. Recuperado de: <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/SL.UEM.TOTL.ZS>
- World Bank. (2023d). *Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) - Latin America & Caribbean, East Asia & Pacific, European Union, North America*. Recuperado de: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=ZJ-Z4-EU-XU>